

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	410
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2022-00423-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
DEMANDADA:	MARÍA TERESA DÍAZ DE RODRÍGUEZ
ASUNTO:	Niega suspensión provisional efectos acto acusado

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

I. ASUNTO

Se decide la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 24857 del 5 de octubre de 2001, mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión de vejez a la señora María Teresa Díaz de Rodríguez, de conformidad con el Decreto 758 de 1990, efectiva a partir del 1° de noviembre de 2001.

II. ANTECEDENTES

La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), por conducto de apoderada especial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la señora María Teresa Díaz de Rodríguez, y deprecó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, esto es, la Resolución No. 24857 del 5 de octubre de 2001, mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión de vejez a la demandada.

Del escrito de suspensión provisional se corrió el traslado previsto en el inciso 2 del artículo 233 del CPACA, oportunidad en la cual la apoderada de la demandada se opuso y adujo que no se cumplen los presupuestos normativos para decretar la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, pues no se acreditó al menos sumariamente la existencia del perjuicio que se ocasionaría si continúa vigente el acto administrativo atacado y, además, advirtió que la medida resultaría excesiva y gravosa para su representada, ya que afectaría sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.

III. CONSIDERACIONES

Las medidas cautelares son mecanismos instituidos en el ordenamiento jurídico para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la eventual sentencia favorable a las pretensiones de la demanda, sin que implique prejuzgamiento, tal como lo dispone expresamente la ley.

También se precisa que las medidas cautelares en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción están reguladas en los artículos 229 y siguientes del CPACA, los cuales las clasificó en (i) preventivas, (ii) conservativas, (iii) anticipativas, y (iv) de suspensión.

El artículo 238 de la Constitución Política consagra:

“La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá suspender provisionalmente por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”.

El artículo 229 del CPACA prevé:

“En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento” (Subrayado fuera de texto).

El artículo 231 *ibídem*, prescribe:

“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos” (Subrayado fuera de texto).

En efecto, la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo constituye una excepción a la presunción de legalidad que los ampara, de modo que por su trascendencia el legislador dispuso que su viabilidad requiere que la solicitud esté debidamente motivada, que la infracción de las normas superiores en que se fundó o debía afincarse sea manifiesta y que pruebe siquiera sumariamente los perjuicios si pretende la indemnización de éstos.

Como se trata de una medida cautelar preventiva, su finalidad es asegurar transitoriamente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, es decir, impedir la aplicación del acto administrativo impugnado y precaver eventuales perjuicios, mientras se resuelve de manera definitiva la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sobre la naturaleza jurídica de esta cautela y sus rasgos esenciales, el Consejo de Estado ha indicado:

*“La medida de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo como medida cautelar que es, según las voces del artículo 229 del C. de P.A. y de lo C.A. exige ‘petición de parte debidamente sustentada’, y acorde con el artículo 231 *ibídem*, procederá ‘por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud’.*

La nueva norma precisa que: 1º) La medida cautelar se debe solicitar, ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o ya en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado. Exige que la petición contenga una sustentación específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el mismo concepto de violación. 2º) La procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto que se acusa de nulidad pueden acontecer si la violación de las disposiciones invocadas, surge, es decir, aparece presente, desde esta instancia procesal -cuando el proceso apenas comienza-, como conclusión del: i) análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o, ii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

De esta manera, lo que en el nuevo Código representa variación significativa en la regulación de esta figura jurídico-procesal de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, con relación al estatuto anterior, radica en que antes era exigencia sine qua non que la oposición normativa apareciera manifiesta por confrontación directa con el acto o mediante los documentos públicos adicionados con la solicitud. Entonces ello excluía que el operador judicial pudiera incursionar en análisis o estudio pues la transgresión debía aparecer prima facie. Ahora, la norma da la apertura de autorizar al juez administrativo para que, desde este momento procesal, obtenga la percepción de si hay la violación normativa

alegada, pudiendo al efecto: 1º) realizar análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas, y 2º) que también pueda estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.

Pero a la vez es necesario que el juez tenga en cuenta el perentorio señalamiento del 2º inciso del artículo 229 del CPACA, en cuanto ordena que ‘la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’ (Auto del 24 de enero de 2013, exp. 2012-00068-00).

Luego, es claro que la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado supone unos requisitos formales y otros sustanciales, cuya inobservancia podrían dar al traste con la solicitud de cautela. Entre los primeros aparecen, por una parte, la sustentación de la medida, esto es, la indicación de las normas violadas y el concepto de violación, advirtiendo que tal justificación deber ser independiente de la aducida en la demanda para fundar la nulidad, es decir, una cosa es la argumentación de la suspensión provisional y otra la de la nulidad, a menos que en aquella se remita para tal efecto a esta; y por otra parte, la demostración siquiera sumariamente del perjuicio que con el acto impugnado se le cause o llegare a causar, si entre sus pretensiones figura la indemnización del mismo.

La entidad demandante considera que existe una incompatibilidad pensional, pues el extinto Instituto de Seguros Sociales al expedir la Resolución No. 24857 del 5 de octubre de 2001, a través de la cual reconoció la pensión de vejez a favor de la señora María Teresa Díaz Rodríguez, se apartó de las normas en las que debía fundarse, en la medida en que la extinta Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, mediante Resolución No. 2901 del 14 de marzo de 1996, le reconoció la pensión de jubilación oficial a la demandada.

Explicó que la Resolución No. 24857 del 5 de octubre de 2001 determinó como fecha de adquisición del status pensional el 11 de septiembre de 1999, tuvo en cuenta 748 semanas cotizadas, fijó el ingreso base de liquidación en \$603.902 y otorgó una mesada pensional de \$344.224 con efectos a partir del 1º de noviembre de 2001, todo de conformidad con el Decreto 758 de 1990; mientras que Cajanal, mediante Resolución No. 2901 del 14 de marzo de 1996 estableció como fecha del status pensional el 11 de septiembre de 1994 y le otorgó una mesada inicial de \$23.686 con efectos a partir del 11 de septiembre de 1994, la cual para el 2021 ascendió a \$908.526.

Puntualizó que no era viable el doble reconocimiento, toda vez que las dos pensiones se causaron con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, aunado a que se desatendió el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, según el cual todos los tiempos laborados o cotizados en el sector público y los cotizados al ISS serán utilizados para financiar la pensión y cuando algún tiempo no se incluya para el reconocimiento de la pensión y por ello no se incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda la expedición del bono, se entregará a quien reconozca la pensión, por parte de la entidad que recibió las cotizaciones o aquella en la cual prestó servicios sin aportes, el valor equivalente a las cotizaciones para pensión de vejez que efectuó o hubiere efectuado al régimen de invalidez, vejez y muerte del ISS.

Concluyó diciendo que el concepto interno de Colpensiones No. 2021_1372644 estableció que no era procedente el reconocimiento de dos pensiones causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, a partir del 1º de abril de 1994, y como quiera que la actora adquirió el status pensional el 11 de septiembre de 1994 con Cajanal y el 11 de septiembre de 1999 con el ISS, deben ser declarados nulos los actos administrativos que las reconocieron, ya que implican un detrimento patrimonial.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 231 del CPACA, es requisito sustancial para que proceda la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, que la violación de las normas superiores citadas como infringidas, surja del análisis de la decisión acusada y su confrontación con tales preceptos o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

La Corte Constitucional ha señalado que la pensión es un “*salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo. Por lo tanto, ‘el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años es debido al trabajador’*. Esto muestra que la pensión es un

derecho constitucional de amplia configuración legal, pues corresponde a la ley definir los requisitos para acceder a la misma. Además, se trata de un derecho que no es gratuito, pues surge de una acumulación de cotizaciones y de tiempos de trabajo efectuados por el trabajador” (sentencia C-177 de 1998).

De otra parte, ese máximo tribunal constitucional, en abultada jurisprudencia, ha indicado que las administradoras de pensiones tienen la obligación de conservar, custodiar y preservar la información pensional de los cotizantes, velar por su certeza y exactitud, de tal manera que sea precisa, clara, detallada, comprensible y oportuna, por lo que las imprecisiones que pudiesen presentarse son de su entera responsabilidad, de modo que al realizarse el reconocimiento pensional inmediatamente produce efectos jurídicos que deben respetarse, pues su desconocimiento quebrantaría prerrogativas fundamentales.

El Consejo de Estado, en sentencia del 7 de febrero de 2019, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, en el proceso con radicación interna No. 5418-18, determinó que una vez analizados los artículos 229 a 231 del CPACA, los requisitos para decretar las medidas cautelares se clasifican en tres categorías, consistentes en: i) requisitos formales, ii) requisitos materiales y iii) requisitos de procedencia específicos. Veamos:

“De las normas antes analizadas¹ se desprende, que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en tres categorías, a saber: (i) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, y (iii) requisitos de procedencia específicos (...).

6.3.1.- Requisitos de Procedencia, Generales o Comunes de Índole Formal. La Sala los denomina «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole formal», en la medida que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes,² de índole formal,³ son: **(1)** debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo;⁴ **(2)** debe existir solicitud de parte⁵ debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio.⁶

6.3.2.- Requisitos de Procedencia Generales o Comunes de Índole Material. La Sala los denomina «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida que exigen por parte del juez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes,⁷ de índole material,⁸ son: **(1)** que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia;⁹ y **(2)** que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.¹⁰

23. Respecto del primer requisito de procedencia, general o común, de índole material, esto es, que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso, la Sala aclara, que el «objeto del proceso», desde un primer nivel de significación, que se corresponde con la teoría procesalista clásica, es la materia o cuestión del litigio, el «thema decidendi» que se somete a consideración de la jurisdicción, e involucra, no sólo las pretensiones, sino que también hace referencia a los hechos, normas y pruebas en que estas se fundan.

¹ Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231.

² En la medida que se exigen para todas las medidas cautelares.

³ En la medida en que estos requisitos únicamente exigen una corroboración formal y no un análisis valorativo.

⁴ Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

⁵ De conformidad con el párrafo del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las únicas medidas que pueden ser declaradas de oficio por el juez son las “medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

⁶ Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

⁷ En la medida que se exigen para todas las medidas cautelares.

⁸ En la medida en que exigen por parte del juez un análisis valorativo.

⁹ Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

¹⁰ Artículo 230, Ley 1437 de 2011.

24. Ahora bien, desde un punto de vista constitucional de aplicación del principio de primacía del derecho sustancial,¹¹ el «objeto del proceso», y en general «de todo proceso que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo», también comprende, en armonía con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011,¹² la finalidad de asegurar la «efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la Ley y la preservación del orden jurídico». Dicho de otro modo, el objeto de todo proceso judicial es en últimas, garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. En ese sentido, el decreto y ejecución de una medida cautelar también debe conciliarse con el postulado superior relativo al respeto de los derechos fundamentales de las personas, siempre que estos no estén en discusión, aclara la Sala.

25. Así pues, es claro para la Sala, que el juez contencioso debe evaluar con especial cuidado si la medida cautelar solicitada en verdad está orientada a garantizar el objeto del proceso, puesto que al ordenar su decreto también se pueden lesionar las prerrogativas fundamentales de los perjudicados con las medidas cautelares. Ante tales circunstancias, las autoridades judiciales deben propender por aplicar las normas pertinentes al caso concreto, de manera tal que logre el menor perjuicio posible a los derechos fundamentales, siempre que estos no estén en discusión, se reitera.

26. Finalmente, ya para agotar lo que tiene que ver con el primer requisito de procedencia, general o común, de índole material, la Sala precisa que respecto de la exigencia de que la medida cautelar solicitada esté orientada a garantizar la efectividad de la sentencia, ello se explica en razón de que con las cautelas se busca asegurar el cumplimiento de las decisiones del juez, es decir, que propenden por la seriedad de la función jurisdiccional, y por esta vía, guardan relación directa con los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en la medida que con las medidas cautelares también se asegura que las decisiones de los jueces sean ejecutadas y cumplidas.

6.3.3.- Requisitos de Procedencia Específicos de la Suspensión Provisional de los efectos del acto administrativo. La Sala los denomina «requisitos de procedencia específicos» porque se exigen de manera particular para cada una de las diferentes medidas cautelares enlistadas, a modo enunciativo, en la Ley 1437 de 2011.¹³ Entonces, en cuanto a los requisitos de procedencia específicos, si se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado -medida cautelar negativa-, se deben tener en cuenta otras exigencias adicionales que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda¹⁴ así: **(a)** si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud;¹⁵ y **(b)** si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios”.

Conforme a lo anterior y descendiendo al caso concreto, se advierte que la cautela cumple con el primer “requisito común de índole formal”, pues Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de la Resolución No. 24857 del 5 de octubre de 2001, mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión de vejez a favor de la actora, pese a que CAJANAL, a través de la Resolución No. 2901 del 14 de marzo de 1996, ya le había reconocido la pensión de jubilación oficial, aduciendo que no era viable el doble reconocimiento, pues las dos pensiones se causaron con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y tuvieron en cuenta cotizaciones efectuadas en el sector público, por lo que se desatendió la prohibición constitucional de percibir doble asignación del tesoro público.

En cuanto a los “requisitos comunes de índole material”, la jurisdicción ha predicado que sobre estos hay unos sub-requisitos, a saber: i) que la medida cautelar sea necesaria para

¹¹ Artículo 228 de la Constitución Política de 1991. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será descentralizado y autónomo.

¹² Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

¹³ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

¹⁴ Por esta razón en el acápite de antecedentes de esta providencia se hizo alusión al medio de control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinantes para el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar.

¹⁵ Artículo 231, inciso 1°, Ley 1437 de 2011.

proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, y ii) que la cautela tenga relación directa con las pretensiones de la demanda.

La apoderada de la parte actora argumentó que la demandada no cumplía con los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación reconocida por Cajanal y a la pensión de vejez otorgada por el ISS, pues a su juicio era necesario que al menos una de ellas se hubiera causado antes del 1° de abril de 1994, cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993, y teniendo en cuenta que Cajanal le reconoció el status pensional desde el 11 de septiembre de 1994 y el ISS a partir del 11 de septiembre de 1999, sobrevino la incompatibilidad pensional, lo cual implica un detrimento del patrimonio público.

En ese orden, es evidente que la parte demandante en su solicitud cautelar expuso razones de derecho que coinciden con los argumentos sobre los cuales se erige la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sin exponer de qué manera la suspensión de los efectos del acto acusado garantizaría el objeto del proceso o la efectividad de la sentencia.

De acuerdo con las pruebas aportadas, la señora María Teresa Díaz de Rodríguez, en la actualidad tiene 78 años de edad y cada una de las pensiones que recibe equivale a un SMLMV, la primera efectiva desde el 11 de septiembre de 1994 y la segunda desde el 1° de noviembre de 2001, de suerte que es razonable concluir que el decreto de la medida cautelar solicitada tendría la virtualidad de afectar gravemente su mínimo vital, en tanto que hace más de 21 años viene percibiendo por tales conceptos dos SMLMV y reducir el ingreso mensual del adulto mayor a la mitad, cuyos reconocimientos pensionales están amparados por la presunción de legalidad, pugnaría con el principio superior de confianza legítima, más aún cuando no se justificó que de no suspenderse los efectos de acto acusado estaría en riesgo el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

En relación con el principio de confianza legítima, el Consejo de Estado ha señalado¹⁶:

“El principio de confianza legítima se define como el mecanismo que permite ‘conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, cuando la Administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones’, y tiene como uno de sus presupuestos la necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que adecúen la actual situación a la nueva realidad.

De igual forma, esta Corporación ha dicho que ‘el principio de confianza legítima consiste en la expectativa genuina que alberga el particular, de que las reglas establecidas por el Estado para el ejercicio de una actividad o el reconocimiento de un derecho no sean variadas súbitamente. De acuerdo con ello, este principio se ve defraudado cuando la autoridad produce un cambio abrupto en sus comportamientos y decisiones, cambio que resquebraja la esperanza legítima que el administrado se ha fijado’.

Por lo tanto, el principio de confianza legítima debe entenderse como una garantía para el administrado de que sus actuaciones administrativas y judiciales están amparadas por el ordenamiento jurídico vigente y no pueden presentarse cambios intempestivos en las decisiones de la administración que afecten las expectativas que ésta misma le ha generado al particular”.

Al examinar la solicitud de medida cautelar se evidencia que no es materialmente necesaria para garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, ya que no pueden conculcarse prerrogativas fundamentales que fueron legalmente reconocidas, como ocurre en este caso, pues se recuerda que las pensiones reconocidas a la señora María Teresa Díaz de Rodríguez están amparadas por el principio de confianza legítima y la presunción de legalidad, garantías que deben desvirtuarse en el curso del proceso a través del debate fáctico, jurídico y probatorio que las partes pueden promover en igualdad de condiciones.

Tampoco se demostró que el pago mensual de las pensiones otorgadas a la demandada esté causando un perjuicio irreparable al patrimonio de la entidad demandante, al afirmar

¹⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 31 de enero de 2019. Rad. 76001-23-33-000-2016-01703-01(AP). CP. Roberto Augusto Serrato Valdés.

que el pago de la pensión de vejez vulnera el principio de sostenibilidad financiera, le imponga al Estado una carga económica que a largo plazo pueda desestabilizar el sistema pensional, o que los efectos de la sentencia resultarían ilusorios de no adoptarse la medida cautelar deprecada.

En este caso, aparte de la confrontación del acto administrativo acusado con las normas superiores invocadas como trasgredidas, debe prevalecer el principio consagrado en el artículo 103 del CPACA, según el cual los procesos que se adelanten ante esta jurisdicción tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la ley y la preservación del orden jurídico, y bajo esa premisa lo razonable y aconsejable es optar por la postura de no sacrificar desproporcionadamente tales prerrogativas fundamentales con una medida cautelar anticipativa cuya adopción menguaría el ingreso de la pensionada, afectando con ello los derechos al mínimo vital y a la seguridad social, de modo que a la postre podrían resultar más gravosas las consecuencias del decreto de la cautela en esta etapa temprana del proceso que los efectos de mantener incólumes las dos pensiones mientras se dirime el litigio definitivamente en la sentencia, de suerte que no se cumpliría el segundo requisito para acceder a la suspensión provisional del acto demandado y por ese motivo el juzgado queda relevado de estudiar el tercer requisito atrás señalado,

En todo caso, como lo indica la Corte Constitucional, ante este tipo de situaciones, “(...) *la carga de la incertidumbre sobre la responsabilidad del pago de la pensión la asumen las entidades fuertes, capaces de soportarla, y no adultos mayores que merecen un trato especial del Estado y de la sociedad, y que por causas ajenas a su voluntad se verían sometidos a sufrimientos desproporcionados e injustos*». ¹⁷, y bajo tal argumento se negará la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado.

Con todo, para constatar la trasgresión de las normas superiores invocadas se requiere un estudio exhaustivo de los actos administrativos que accedieron a los reconocimientos pensionales y de las pruebas allegadas al proceso, y de acuerdo con ello definir si debe declararse su nulidad, lo cual es propio de la sentencia.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

1.- NEGAR la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 24857 del 5 de octubre de 2001, mediante la cual el Instituto de los Seguros Sociales reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a favor de la señora María Teresa Díaz de Rodríguez, impetrada por la Administradora Colombiana de Pensiones.

2.- RECONOCER al Dr. Everth Camilo Vivas Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.085.689.367 expedida en Taminango y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 349547 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado sustituto de la Administradora Colombiana de Pensiones, en los términos y para los fines conferidos en el poder y de acuerdo con los anexos obrantes en el archivo “10SustitucionColpensiones.pdf” del expediente digital.

3.- RECONOCER a la Dra. Elda Elena Díaz Mejía, identificada con la cédula de ciudadanía No. 50.907.321 expedida en Montería y titular de la tarjeta profesional de abogada No. 118627 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la parte demandada, en los términos y para los fines conferidos en el poder obrante en el archivo “17Poder.pdf” del expediente digital.

4.- REINGRESAR el expediente al despacho, una vez ejecutoriado el presente proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

17 Corte Constitucional, Sentencias T-691 de 2006 y T 371 de 2017. En estas sentencias, la Corte estudió unos casos parecidos al que se analiza en esta ocasión, concluyendo que a las accionantes se les vulneró el derecho a la seguridad social y que con ello se comprometió su mínimo vital, pues a raíz de una disputa interadministrativa sobre cuál era la entidad responsable de una parte del pago, la accionante no había podido tener acceso a su pensión.

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

KPG

Auto 1 de 2

Firmado Por:
Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **66d3e16e988f42b3a511f5acb3a381468bc6936de25d5f0b2f4791ba4b484ed1**

Documento generado en 25/08/2023 04:45:44 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>